

“El impacto humanitario de las nuevas dinámicas del conflicto armado y la violencia en diversas regiones de Colombia”

Anexos regionales¹

Antioquia

Antioquia es uno de los departamentos más grande y poblado de Colombia, y ha sido históricamente particularmente golpeado por el conflicto armado. Está dividido en 9 subregiones: Urabá, Occidente, Suroeste, Oriente, Magdalena Medio, Nordeste, Bajo Cauca, Norte y Valle de Aburra, incluyendo la capital Medellín. Al límite norte del departamento queda el departamento de Córdoba con el cual comparte la zona del Nudo del Paramillo.

Las zonas del Urabá, del Nudo del Paramillo y del Bajo Cauca son especialmente importantes para los grupos armados, ya que forman un corredor estratégico unificado entre el norte del Chocó y los departamentos de Bolívar, César y Norte de Santander, que quedan en la ruta hacia el Caribe. Además, son zonas con mucha presencia de cultivos de uso ilícito y fuentes auríferas y otros tipos de minería. La capital Medellín es un eslabón importante para las economías ilegales, lo que se refleja en la violencia urbana que conoce la ciudad.

Situación del conflicto

Las FARC-EP tienen una presencia significativa con los frentes 4, 5, 18, 34, 36, 57, 58, el frente Mario Vélez y la compañía Gerardo Guevara en las subregiones del Urabá, del Norte (Nudo del Paramillo), del Nordeste y del Bajo Cauca, especialmente en los municipios de Ituango, Briceño, Tarazá, Cáceres y el Bagre, y en las subregiones del Occidente, Suroeste y Magdalena Medio. En el departamento de Córdoba la presencia de las FARC-EP se concentra en los municipios del sur (Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré) en la zona del Nudo del Paramillo a través de los frentes 5, 18, 36 y 58. La violencia debida a las FARC-EP ha disminuido sobre todo desde el alto el fuego de julio de 2015. Sin embargo, el reacomodo de fuerzas en varias zonas ha llevado a varias situaciones graves de violación del DIH y de derechos humanos.

Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) son la agrupación de los Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD) con mayor presencia en el departamento desde que han logrado tener una posición hegemónica después de varios años de confrontación con los Rastrojos y el grupo Seguridad Héroes del Nordeste. Tienen presencia en las regiones de Urabá, Norte, Occidente, Bajo Cauca, Nordeste Magdalena Medio y Valle de Aburrá, de manera diferencial según el municipio, zonas urbanas o rurales, con armamento largo o corto y por medio de organizaciones criminales locales. En Córdoba, tienen una presencia en el medio rural. Si las AGC han tenido pactos de no agresión y reparto del territorio con las FARC-EP entre 2011 y 2015, este pacto se rompió y ambos grupos están ahora en confrontación en

¹ El informe, elaborado por Francisco Rey y Joséphine Dubois del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria- IECAH, de España, con apoyo del Centro Noruego para la Construcción de la Paz- NOREF (por sus siglas en inglés) y comisionado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios- OCHA en Colombia, puede consultarse en http://campusiecah.org/www/F/190816_informe_iecah_final_0.pdf. Los datos, salvo que se indique lo contrario, corresponden a los meses de mayo y junio de 2016.

varias zonas como en el municipio del Bagre, en el Bajo Cauca y en Briceño. La concentración de las FARC-EP en zonas de repliegue para cumplir con el cese al fuego ha permitido la expansión de las AGC. Según el análisis de organizaciones de terreno, este grupo, al contrario que los antiguos paramilitares, no tiene una ideología específica o componentes contrainsurgentes, sino un interés fundamental en el negocio.

A esta dinámica se suma la expansión paralela del ELN que tendría presencia con los frentes Héroes de Anorí, José Antonio Galán, Capitán Mauricio, Héroes de Tarazá, Compañero Tomás y Resistencia Cacique Guamocó en 10 municipios de las regiones Norte, Bajo Cauca y Nordeste. Varias fuentes nos han señalado alianzas entre el ELN y las FARC-EP para combatir a las AGC, mediante el llamado “cambio de brazaletes” y traslados de hombres y material de guerra. Además, el ELN estaría aumentando su reclutamiento.

La Fuerza Pública tiene una fuerte presencia en el departamento con la Operación Troya en el Bajo Cauca y el Norte, la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo del Paramillo y la Operación Titán en Urabá. Desde la emisión de la directiva 015 el 22 de abril 2016, la Fuerza militar puede combatir a las AGC como Grupo Armado Organizado (GAO) dentro del conflicto armado. Esta presencia militar no ha tenido mucha eficiencia en cuanto a la resolución de los problemas de seguridad. Genera aún bastante desconfianza por la connivencia y la corrupción entre ciertos miembros de la Fuerza Pública y los GAPD llegando hasta altos niveles de responsabilidad.

La ciudad de Medellín, como otras grandes ciudades de Colombia, tiene un rol importante en el desarrollo del conflicto armado, ya que es un centro para el tráfico y para el lavado de dinero producto de las actividades ilegales como la minería y el narcotráfico. La población que vive en las periferias legales e ilegales de la ciudad es económicamente y socialmente vulnerable, y a menudo ha sido desplazada del campo por el conflicto armado. Hoy en día el actor no estatal más presente en estas zonas son los GAPD a través de combos y pandillas que pertenecen a su « franquicia ». Aunque la tasa de homicidios haya disminuido desde el año 2013, no significa que su presencia haya disminuido: es muy conocido que hubo un “pacto de fusiles” de repartición del territorio entre la Oficina de Envigado y las AGC o Urabeños en el pasado. La inestabilidad de esos pactos hace que la tasa de homicidios pueda aumentar de nuevo en cualquier momento, como lo muestra la reciente subida en julio 2016.

Situación humanitaria

Indicadores humanitarios destacados:

(cifras del periodo Noviembre 2012 a diciembre 2015)

MAP/MUSE (DAICMA): Entre noviembre 2012 y Diciembre 2015, Antioquia fue **el departamento más afectado por accidentes por MAP/MUSE**, concentrando cerca de 1/5 de las víctimas del país.

Acciones bélicas y ataques contra la población civil (OCHA): También fue el tercer departamento más afectado por acciones bélicas y ataques contra la población civil.

Desplazamiento (UARIV): Antioquia fue el segundo departamento expulsor (14%) del total.

Delitos sexuales (UARIV): Antioquia fue el tercer departamento más afectado.

En la zonas rurales de Antioquia

El control social aumenta por medio de homicidios y desapariciones generando temor

El control social forma parte de la estrategia de control territorial por los grupos no estatales y puede tomar varias formas. Restricciones a la movilidad: no se puede pescar o cazar determinados días, hay “toques de queda” en la noche, hay que solicitar un permiso para salir de la vereda, hay paros armados como los de las AGC en marzo de 2016, etc. Estas limitaciones afectan tanto comunidades indígenas que dependen de la pesca y la caza para su alimentación, como comunidades campesinas que viven en pequeños cascos urbanos. También se imponen nuevas normas sociales: hay panfletos de “limpieza social” y la Defensoría del Pueblo ha señalado castigos públicos por parte de las AGC en el municipio de El Bagre.

Para hacer respetar este orden, los actores no estatales crean un clima de zozobra. Todos los actores usan amenazas en contra de los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos que intentan imponerse. A veces llegan hasta homicidios o desapariciones. Las AGC usan el temor generado por los actos de los antiguos paramilitares que les permite decretar un paro armado que sea respetado. Este clima rompe el tejido social, generando una desconfianza general en las comunidades.

El desplazamiento forzado sigue

A pesar de la disminución global de la violencia en los últimos años, los desplazamientos masivos siguen como consecuencia de los enfrentamientos entre los grupos estatales y con la Fuerza Pública. Los más recientes ocurrieron en El Bagre en febrero 2016 y en Puerto Libertador (zona del Nudo del Paramillo en Córdoba) en febrero y julio 2016. El desplazamiento individual aumentó por el clima de zozobra y el despojo de tierras, siguiendo la tendencia nacional.

La violencia y explotación sexual afecta a las mujeres

Los desplazamientos afectan mucho a las mujeres, que a menudo son además víctimas de violencia sexual antes de irse, o una vez llegadas a otro lugar (que resulta muchas veces la ciudad de Medellín en el caso de Antioquia). También existen redes de explotación sexual vinculadas a la minería. Organizaciones nos han señalado los casos de mujeres llevadas cada fin de semana a zonas mineras. Estos hechos de violencia a menudo no se están denunciado, y cuando lo son, hace falta una coordinación en la respuesta institucional entre los pilares legal, psicosocial y médico.

La presencia institucional civil del Estado sigue siendo escasa

Si el Estado está muy presente militarmente, hace mucha falta su presencia institucional con servicios de salud, educación, infraestructuras como alcantarillados y plantas de tratamiento del agua. El acceso a la educación es muy limitado en ciertas zonas, lo que genera deserción escolar además del conflicto y del reclutamiento por grupos no estatales.

El impacto humanitario de la minería

De igual manera que en el Chocó, las zonas de minería artesanal están hoy en muchos casos controladas por actores armados que presionan a los mineros. Los grupos invierten en maquinaria (retroexcavadoras principalmente) para aumentar la producción y generan muchos impactos negativos ambientales y sociales. Además de la explotación y violencia sexual, la minería de este tipo genera alcoholismo, consumo de drogas, trabajo infantil, y violencia entre los grupos y las comunidades en contra de esta actividad. Por fin, las grandes cantidades de productos químicos utilizadas contaminan los ríos.

La MAP/MUSE² son un peligro a corto y largo plazo

Las minas antipersonales sembradas en el pasado por las FARC-EP para proteger los cultivos de uso ilícito y frenar el avance de la Fuerza Pública representan todavía un peligro para las comunidades, una restricción a la movilidad y una razón de desplazamiento. En julio de 2015 se presentó un desplazamiento masivo de una comunidad indígena Embera en Urao por confinamiento por minas.

En Medellín

La violencia se “normaliza”

Afortunadamente, Medellín ya no es la ciudad de los años 90 con atentados regulares. Sin embargo, una violencia urbana cotidiana es ejercida por combos y pandillas controlados por GAPD de alcance más grande. Esa violencia afecta sobre todo las periferias sociales y geográficas de la ciudad, donde se encuentran viviendo muchos desplazados que habían venido buscar más seguridad.

Igual que en el campo, el control social permite a los grupos armados controlar territorios y corredores estratégicos para el tráfico, como el corregimiento de San Cristóbal que bordea la vía hacia Dabeiba, Apartadó y Turbo. Las amenazas, desapariciones y los homicidios generan temor en la población que vive bajo normas especiales (fronteras invisibles, normas de comportamiento) de grupos que son la “ley y justicia” de estos barrios. Estos hechos de violencia también ocurren entre miembros de diferentes bandas que lideran el microtráfico. Si la tasa de homicidios ha disminuido entre 2013 y 2015 gracias al llamado “pacto de fusiles” entre la Oficina de Envigado y los Urabeños, estaría de nuevo aumentando a mitad del año 2016.

La extorsión es cotidiana y estos grupos han copado todos los sectores que generan dinero. Por ejemplo varias organizaciones de terreno nos señalaron que es bien sabido que el comercio de arepas y huevos es controlado por los GAPD.

² Minas Antipersonales y Municiones Sin Explotar

Utilización de niños, niñas y adolescentes

Los niños, niñas y adolescentes son una población muy vulnerable y muy afectada por esta situación de violencia. La falta de oferta educacional y laboral aumenta los riesgos de consumo de drogas y de reclutamiento por bandas y combos. Varias organizaciones nos han señalado una diferencia que parece injusta entre jóvenes reclutados por guerrillas que son considerados como víctimas y jóvenes reclutados por GAPD en las ciudades que son considerados como delincuentes e ingresan al sistema de responsabilidad penal para adolescentes del ICBF.

Medellín, lugar de recepción y expulsión de población desplazada

Medellín sigue siendo un lugar de recepción de desplazados: un líder comunitario de la comuna 8 nos ha señalado que familias todavía estaban llegando a su barrio, pero pocas a la vez, volviendo su desplazamiento invisible. Según todas las organizaciones encontradas, el desplazamiento intraurbano está muy subregistrado. Este afecta a menudo personas que ya han sido desplazadas, mostrando que, en muchos casos, la garantía de no-repetición no existe. El desplazamiento en Medellín está causado por grupos armados en su mayor parte, pero también por megaproyectos. La ciudad de Medellín busca, con legitimidad, encuadrar la expansión urbana con un Plan de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, varias comunidades como la comuna 8 se quejan de no haber sido consultadas ni integradas en este plan. Los habitantes se ven nuevamente desplazados y cuando existen soluciones de reubicación, no son necesariamente pertinentes (campesinos desplazados están reubicados en grandes edificios verticales de la ciudad sin acompañamiento, lo que genera incompreensión y falta de adaptación).

Escenarios post-acuerdo

En la zonas rurales de Antioquia

- El aumento de la confrontación entre el ELN y la Fuerza Pública y el ELN y las AGC en el marco del intento de recuperación de zonas de las FARC-EP aumentando las violaciones del DIH y de los derechos humanos.
- El posible traslado de miembros de las FARC-EP al ELN, disminuyendo la eficiencia del proceso de desmovilización.
- La generación de impactos humanitarios graves si la aplicación de la directiva 015 en contra de las AGC utiliza los bombardeos.
- El aumento del control social por parte de grupos no estatales en zonas de conflictividad (Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Urabá).
- El mantenimiento de los impactos humanitarios generados por la minería ilegal si el Gobierno Nacional no se compromete fuertemente a tratar este problema.
- El peligro de violencia en contra de desmovilizados por parte de miembros de GAPD.

En Medellín

- La llegada de desmovilizados a la ciudad de Medellín, lo que podría generar un aumento de la violencia por venganza por parte de bandas y GAPD.
- La posibilidad fuerte de una urbanización del conflicto, hacia una forma cada vez más criminal, teniendo un impacto humanitario no menos grande que el del conflicto armado: Aumento de restricciones a la movilidad mediante “fronteras invisibles”, aumento del desplazamiento intraurbano, violaciones de los derechos humanos.
- El reclutamiento forzado o uso de niños, niñas y jóvenes para el microtráfico y la explotación sexual podrían seguir aumentando, en correlación con el consumo de drogas.

Recomendaciones especiales

- Implementar una estrategia de recuperación de los territorios dejados por las FARC-EP, con el enfoque de aumentar la seguridad de la población y el respeto de los derechos humanos. Significa, entre otros, usar la directiva 015 con precaución, dado que los GAPD a menudo viven con las comunidades.
- Implementar planes de desarrollo no sólo enfocados en la seguridad sino también en inclusión social mediante la presencia institucional del Estado, en sectores de educación y salud en prioridad.
- Mejorar el registro y la prevención de la violencia sexual basada en género, coordinando los pilares legal, psicosocial y médico de la respuesta institucional.
- Preparar una eventual llegada de desmovilizados a ciudades grandes como Medellín, con medidas de protección y de inclusión.